



Asamblea General

Distr. general
26 de junio de 2013
Español
Original: inglés

Sexagésimo octavo período de sesiones

Tema 86 de la lista preliminar*

Alcance y aplicación del principio de la jurisdicción universal

Alcance y aplicación del principio de la jurisdicción universal

Informe del Secretario General

Resumen

El presente informe ha sido preparado de conformidad con la resolución 67/98 de la Asamblea General, en la que la Asamblea solicitó al Secretario General que preparara un informe basado en la información y las observaciones recibidas de los Estados Miembros y los observadores pertinentes, según procediera, sobre el alcance y la aplicación de la jurisdicción universal, incluida, cuando correspondiera, información sobre los tratados internacionales aplicables que resultaran pertinentes y sus disposiciones legales y prácticas judiciales internas.

* A/68/50.



I. Introducción

1. El presente informe ha sido preparado de conformidad con la resolución 67/98 de la Asamblea General. El informe contiene los comentarios y observaciones recibidos desde la publicación del informe de 2012 (A/67/116) y debe interpretarse en relación con él y con los informes anteriores (A/65/181 y A/66/93 y Add.1).
2. De conformidad con lo dispuesto en la resolución 67/98, en la sección II del presente informe, y en los cuadros 1 y 2, se hace hincapié en información concreta acerca del alcance y aplicación de la jurisdicción universal, sobre la base de las normas jurídicas nacionales pertinentes, los tratados internacionales aplicables y la práctica judicial. La sección III contiene información recibida de los observadores y en la sección IV figura una sinopsis de las cuestiones planteadas por los Gobiernos que podrían someterse a debate.
3. Se recibieron respuestas de Australia, Colombia, Cuba, España, Grecia, Hungría, el Líbano, Moldova y Panamá.
4. También se recibieron respuestas del Comité Internacional de la Cruz Roja, el Consejo de Europa y la Unión Africana¹.
5. Las respuestas completas pueden consultarse en el sitio web de la Sexta Comisión de la Asamblea General (www.un.org/en/ga/sixth/) en el apartado relativo al sexagésimo octavo período de sesiones.

II. Alcance y aplicación de la jurisdicción universal de acuerdo con las normas jurídicas nacionales pertinentes, los tratados internacionales aplicables y la práctica judicial: comentarios de los gobiernos

A. Normas jurídicas básicas

1. Normas constitucionales y otros marcos jurídicos nacionales

Australia

6. Los tribunales de Australia son competentes para conocer del delito de esclavitud (artículo 270.1 del Código Penal) con independencia de que el autor se encontrara dentro o fuera del territorio australiano en el momento en que se cometió el delito. Otros delitos comprendidos en la sección 270 están sujetos a la competencia de “categoría B”. La competencia de categoría B significa que, cuando la conducta constitutiva de estos delitos ocurre fuera de Australia, los tribunales australianos solo serán competentes si el autor es un ciudadano australiano, un residente en Australia o una entidad social de nacionalidad australiana. Los delitos de trata de personas (artículos 271.2 a 271.4) y servidumbre por deudas (artículos 271.8 y 271.9) están sujetos a la competencia de categoría B.

¹ La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa comunicó que no disponía de información u observaciones pertinentes que presentar.

7. La Ley por la que se Modifica la Legislación sobre Delitos (Esclavitud y Situaciones Similares y Trata de Personas) de 2013 entró en vigor el 8 de marzo de 2013. La Ley modificó la sección 270 del Código Penal para tipificar los nuevos delitos de matrimonio forzado y trabajo forzado. La Ley ha suprimido el delito de servidumbre sexual (antiguo artículo 270.6) y ha introducido los de servidumbre en todas sus formas. La Ley también ha suprimido el delito de captación engañosa para la prestación de servicios sexuales (antiguo artículo 270.7) y ha introducido el nuevo delito de captación engañosa para el desempeño de un trabajo o la prestación de servicios. Todos estos delitos se rigen por la competencia de categoría B.

Colombia

8. Colombia reiteró sus anteriores observaciones (véase A/66/93, párrs. 10 a 17). Como país donde se aplica la teoría dualista del derecho internacional, Colombia considera que, para que puedan iniciarse actuaciones judiciales, el acto en cuestión debe estar tipificado como delito conforme a su derecho penal interno. Según el artículo 2 del Código Penal (Ley 599 de 2000), los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia y la Constitución Política forman parte del Código Penal. Por otra parte, Colombia reconoció que, dadas las dificultades de recopilar elementos materiales probatorios y la necesidad de que el acusado se encuentre presente en el territorio del Estado que enjuicia, se deben fortalecer los sistemas de cooperación mutua en asuntos judiciales.

9. Además de reiterar la función del artículo 93 de la Constitución Política de Colombia (véase A/66/93, párr. 11), dicho país observó que el artículo 94 establece que la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuran expresamente en esos instrumentos.

10. Conforme a los artículos 24, 28 y 29 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), la jurisdicción universal puede aplicarse en la medida en que se encuentre definida en tratados suscritos y ratificados o en disposiciones de la legislación interna que estipulen dicha competencia.

11. El artículo 16 del Código Penal dispone que procede el juzgamiento del extranjero que comete delito en perjuicio de otro extranjero, en la medida en que se encuentre en territorio colombiano, la pena en Colombia sea superior a tres años, no sea un delito político y, ante solicitud de extradición, el Gobierno colombiano se haya negado a concederla.

Grecia

12. El artículo 8 del Código Penal de Grecia establece la jurisdicción universal para las siguientes categorías de delitos, en relación con los cuales la legislación penal griega resulta aplicable tanto a los nacionales griegos como a los no nacionales, con independencia de lo que dispongan las leyes del Estado en el que se haya cometido el acto:

- a) Alta traición, traición contra el Estado griego y actos terroristas;
- b) Delitos relacionados con el servicio militar y el reclutamiento obligatorio;

- c) Actos punibles cometidos por personas en su calidad de funcionarios del Estado griego;
- d) Actos contra un funcionario griego en el ejercicio de sus funciones o en relación con ellas;
- e) Perjurio en procedimientos ante autoridades griegas;
- f) Piratería;
- g) Delitos monetarios;
- h) Tráfico de esclavos, trata de personas, prostitución forzada o abuso sexual de menores para la obtención de beneficio, turismo sexual infantil o pornografía infantil;
- i) Tráfico ilícito de estupefacientes;
- j) Distribución y tráfico ilícitos de publicaciones obscenas;
- k) Cualquier otro delito al que resulte aplicable la legislación penal griega en virtud de disposiciones específicas o convenios internacionales firmados y ratificados por Grecia.

Grecia observó que el artículo 8 se ha aplicado sobre todo a casos de tráfico de estupefacientes. Conforme a este artículo, se ejerce la jurisdicción nacional con independencia del lugar donde se haya cometido el delito o la nacionalidad de la presunta víctima o autor, jurisdicción que es concurrente con la de otros Estados. Para que se inicie el enjuiciamiento no es preciso que lo solicite una autoridad extranjera o la víctima.

13. La Ley 3658/2008 de Medidas de Protección de los Bienes Culturales y otras Disposiciones (Gaceta Oficial, vol. A 70/22.4.2008) establece en su artículo 13, párrafo 4, que los delitos previstos en el capítulo 9 de la Ley 3028/2002 de Protección de las Antigüedades y el Patrimonio Cultural en General (Gaceta Oficial, vol. A 153/28.6.2002) serán perseguidos y castigados conforme a la legislación penal griega aunque se hayan cometido en el extranjero. Por otra parte, el artículo 2 de la Ley 3948/2011 (Gaceta Oficial, vol. A 71/5.4.2011) de Adaptación del Derecho Interno a las Disposiciones del Estatuto de la Corte Penal Internacional, ratificado mediante la Ley 3003/2002 (A 75), establece que las disposiciones de esa ley se aplican a nacionales y no nacionales por todos los actos enumerados en los artículos 7 a 15 (es decir, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, incumplimiento del deber de supervisión y omisión del deber de denunciar un delito) siempre que se hayan cometido:

- a) En el territorio del Estado griego o a bordo de aeronaves o buques griegos, dondequiera que se encuentren, a menos que estén sujetos a legislación extranjera con arreglo al derecho internacional;
- b) En el extranjero, por nacionales griegos o extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad griega tras la comisión del acto;
- c) En el extranjero, contra el Estado griego o sus nacionales.

14. Grecia también es parte en varios convenios internacionales que incluyen obligaciones *aut dedere aut judicare*.

Hungría

15. En Hungría, la jurisdicción universal se define en dos disposiciones. Según el apartado c) del párrafo 1) del artículo 4 de la Ley IV de 1978 por la que se aprueba el vigente Código Penal, la ley húngara se aplicará a cualquier acto cometido por un ciudadano no húngaro en el extranjero si constituye un crimen de lesa humanidad o cualquier otro delito que deba ser perseguido en virtud de un tratado internacional. Por otra parte, según el inciso ac) del apartado a) del párrafo 2) del artículo 3 de la Ley C de 2012 por la que se aprueba el nuevo Código Penal, la ley húngara se aplicará a cualquier acto previsto en los capítulos XIII (crímenes de lesa humanidad) y XIV (crímenes de guerra) o a cualquier otro delito que deba ser perseguido en virtud de un tratado internacional.

16. Ninguna de las dos disposiciones citadas exige que el acto sea un delito en el lugar donde se cometió.

Líbano

17. El Líbano reiteró que no era parte en ningún tratado o acuerdo sobre jurisdicción universal. El derecho libanés no contiene ninguna disposición que pueda interpretarse en el sentido de que establece la jurisdicción universal (véanse A/65/181, en general, y A/66/93, párr. 22).

Moldova

18. La jurisdicción universal se regula en el artículo 11, párrafo 3, del Código Penal, que dispone lo siguiente:

A menos que sean condenados en otro Estado, los extranjeros y apátridas que no tengan residencia permanente en la República de Moldova y cometan un delito fuera de su territorio serán penalmente responsables con arreglo al presente Código y estarán sujetos a responsabilidad penal en el territorio de la República de Moldova, siempre que los delitos cometidos sean contrarios a los intereses del Estado o a la paz y la seguridad de la humanidad, o constituyan crímenes de guerra contemplados en los tratados internacionales en los que la República de Moldova es parte.

19. Las disposiciones del Código Penal relativas a los delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad y los crímenes de guerra se integran en la parte especial, artículos 135 a 144. Los instrumentos internacionales en los que Moldova es parte prevalecen sobre la legislación interna y pueden aplicarse directamente en virtud del artículo 1, párrafo 3, del Código Penal. La Ley núm. 45 de 7 de febrero de 2013 modificó el Código Penal para tipificar en el derecho interno los delitos previstos en el Estatuto de Roma, concretamente mediante los artículos 127 (personas protegidas por el derecho internacional humanitario); 130 (mercenarios); 135 (genocidio); 135 1) (crímenes de lesa humanidad); 137 (crímenes de guerra contra la humanidad); 137 1) (crímenes de guerra contra bienes y otros derechos); 137 2) (uso de medios prohibidos en el desarrollo de actividades de guerra); 137 3) (uso de métodos prohibidos en el desarrollo de actividades de guerra); y 137 4) (uso ilícito de signos distintivos de derecho internacional humanitario).

Panamá

20. Panamá reiteró la información contenida en los párrafos 18 a 20 del informe anterior (A/67/116).

Suecia

21. Suecia reiteró la información contenida en anteriores informes (véanse A/66/93, párrs. 43 a 45, y A/67/116, párr. 21).

2. Tratados internacionales aplicables

22. En el cuadro 2 figura una lista de los tratados a los que se hace referencia en la información recibida de los gobiernos.

B. Condiciones, restricciones o limitaciones aplicables al ejercicio de la jurisdicción**1. Normas constitucionales y otros marcos jurídicos nacionales****Hungría**

23. Hungría indicó que cualquier procedimiento penal con arreglo al principio de la jurisdicción universal debe iniciarse por el Fiscal General. Se contempla que el enjuiciamiento por las autoridades húngaras de delitos cometidos por ciudadanos extranjeros o apátridas pueda afectar a las relaciones internacionales de Hungría.

Moldova

24. Moldova confirmó que, con arreglo al artículo 60, párrafo 8, de su Código Penal, los delitos enumerados en el artículo 11, párrafo 3, de dicho texto normativo no prescriben.

España

25. España reiteró sus observaciones contenidas en los párrafos 74 a 78 del documento A/66/93, y destacó que a raíz de la reforma introducida en 2009 por la Ley Orgánica 1/2009, en virtud de la cual se modifica la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, ya no puede decirse que en España exista un principio de jurisdicción universal de carácter absoluto, puesto que, según el nuevo párrafo 4 del artículo 23, queda sujeto a la existencia de “algún vínculo de conexión relevante con España” y a una cierta subordinación de la jurisdicción española a otra jurisdicción competente (jurisdicción concurrente), ya sea nacional o internacional, siempre que en la misma se haya iniciado un procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva de los hechos punibles en cuestión.

Suecia

26. Suecia reiteró la información contenida en el informe anterior (véase A/67/116, párrs. 25 a 27).

2. Práctica judicial y de otra índole

Moldova

27. Entre 2004 y 2013, ningún tribunal nacional conoció de causa penal alguna iniciada en virtud de los artículos 135 a 144 del Código Penal, ni existe ninguna práctica interna sobre jurisdicción universal.

Colombia

28. Colombia se refirió a sus observaciones anteriores (véase A/66/93, párr. 53) e indicó que, aunque no se conocían casos en que se hubiera ejercido en Colombia la jurisdicción universal en relación con una violación de los derechos humanos cometida por un extranjero en otro país, o en los que se hubiera solicitado la extradición en ejercicio de la jurisdicción universal, la Corte Constitucional declaró, en la sentencia C-979 de 2005, que es del interés de todos los Estados la investigación y sanción de las más graves violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, tales como el genocidio, la tortura y la desaparición forzada, y que ese interés legitima a cualquier Estado para que en nombre de la comunidad internacional asuma la jurisdicción para investigar, juzgar y sancionar a los perpetradores de estos crímenes.

España

29. Cabe destacar en particular tres ejemplos recientes de jurisprudencia española en materia de jurisdicción universal.

30. En primer lugar, mediante el auto 1566/2001, de 6 de octubre, la Sala de lo Penal, Sección 1ª, del Tribunal Supremo, declaró que no había lugar a la admisión del recurso de casación interpuesto contra la decisión de desestimar las alegaciones por supuestos crímenes de lesa humanidad, torturas y crímenes de guerra imputados a determinadas autoridades chinas contra la población tibetana.

31. En segundo lugar, el 29 de octubre de 2012, el Juzgado Central de Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional declaró procesados a siete militares chilenos imputados por el presunto crimen de genocidio (así como por los presuntos delitos de asesinato y detención ilegal) en relación con la muerte de un español que trabajaba como funcionario público internacional en la Comisión Económica para América Latina. El auto destacó que “[el] proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá provisionalmente cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país o por el Tribunal [internacional]”.

32. En tercer lugar, en el auto 1916/2012, de 20 de diciembre, la Sala de lo Penal, Sección 1ª, del Tribunal Supremo, estableció que no había lugar a la admisión del recurso de casación interpuesto contra el auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 23 de marzo de 2012. Se declaró que los tribunales españoles carecían de jurisdicción para investigar supuestas torturas y malos tratos infligidos en el centro de detención de la bahía de Guantánamo por aplicación del principio de subsidiariedad, ya que las autoridades norteamericanas habían acreditado la existencia de procedimientos administrativos y penales que habían investigado o estaban investigando los hechos.

III. Alcance y aplicación de la jurisdicción universal: comentarios de observadores

Unión Africana

33. La Unión Africana destacó la aprobación por parte de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la decisión sobre el abuso del principio de la jurisdicción universal (Assembly/AU/Dec.420(XIX)). En esa decisión, la Asamblea instó a los Estados miembros de la Unión Africana a que aplicaran el principio de reciprocidad para defenderse del abuso de la jurisdicción universal. Además, la Asamblea reiteró su solicitud de que ningún Estado miembro diera cumplimiento a las órdenes de detención dictadas abusando de la jurisdicción universal. La Asamblea requirió asimismo a la Comisión de la Unión Africana que enviara una comunicación oficial a la Comisión Europea para que esta solicite al Gobierno de España que cumpla la legislación española respecto de las órdenes de detención dictadas contra dirigentes ruandeses. La Unión Africana también aprobó el Modelo de Ley Nacional sobre la Jurisdicción Universal para los Crímenes Internacionales².

Consejo de Europa

34. El Consejo de Europa reiteró lo indicado en su anterior comunicación (véase A/66/93, párrs. 110 a 113). El 13 de junio de 2012, el Comité de Ministros aprobó una respuesta a la recomendación 1953 (2011) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa titulada “La obligación de los Estados miembros y observadores del Consejo de Europa de cooperar en el enjuiciamiento de los crímenes de guerra”. El Comité afirmó, entre otras cosas, lo siguiente:

6. El Comité de Ministros observa asimismo que varios Estados miembros del Consejo de Europa han reconocido el principio de la jurisdicción universal. Sin embargo, no hay consenso internacional sobre la definición y el alcance de ese principio, ya que su aplicación en la práctica a menudo está sujeta a limitaciones jurídicas impuestas por las legislaciones nacionales. Por tanto, todavía queda mucho por hacer en el ámbito de los ordenamientos jurídicos internos para garantizar la eficacia y eficiencia del ejercicio de la jurisdicción universal.

7. Por consiguiente, el Comité de Ministros considera que el Consejo de Europa podría reforzar la aplicación del principio *aut dedere aut judicare* como medio eficaz para juzgar los crímenes de guerra en los casos en que no se pueda ejercer la jurisdicción universal. Además, alienta a que se promueva la cooperación entre los Estados miembros y observadores.

35. En su sentencia de 12 de julio de 2007 en la causa *Jorgic c. Alemania*³, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Alemania no había violado el artículo 6, párrafo 1, del Convenio Europeo de Derechos Humanos relativo al derecho a un proceso sustanciado por un tribunal “establecido por ley”. El demandante, ciudadano de Bosnia y Herzegovina de origen serbio, residió legalmente en Alemania desde 1969 hasta principios de 1992. A continuación,

² El Modelo de Ley obra en poder de la División de Codificación de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría.

³ Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Sala Quinta, 12 de julio de 2007, *Jorgic v. Germany*, demanda núm. 74613/01.

regresó a Bosnia. El 16 de diciembre de 1995, el demandante fue detenido cuando entraba en Alemania y puesto en prisión provisional al pesar sobre él serias sospechas de que había cometido actos de genocidio.

36. Conforme al artículo I de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, a las partes contratantes les incumbe la obligación *erga omnes* de prevenir y sancionar el genocidio, cuya prohibición forma parte del *ius cogens*. Por ello, el Tribunal consideró razonable y convincente el argumento de los tribunales nacionales conforme al cual el objeto de la Convención sobre el Genocidio, expresado particularmente en ese artículo, no excluía la jurisdicción para sancionar el genocidio en Estados cuya legislación establezca la extraterritorialidad a ese respecto. Además, el Tribunal encontró respaldo a su interpretación en el reconocimiento expreso del principio de la jurisdicción universal para el genocidio hecho por el Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia, así como en las disposiciones legales y la jurisprudencia de otras muchas partes contratantes.

Comité Internacional de la Cruz Roja

37. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) reiteró sus comentarios que figuraban en los párrafos 121 a 140 del informe de 2011 (A/66/93). El Comité actualizó los datos relativos al número de Estados partes en el Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra, de 12 de agosto de 1949 (173 Estados), el número de Estados que habían conferido en cierta medida una jurisdicción universal a sus tribunales nacionales respecto de las violaciones graves del derecho internacional humanitario (más de 100 Estados); y las actividades de su Servicio de Asesoramiento, que en diciembre de 2012 organizó una consulta de expertos sobre jurisdicción universal, centrada en los avances registrados en esta materia desde la creación de la Corte Penal Internacional.

38. Asimismo, el Comité destacó que, junto a los Tribunales Internacionales para Rwanda y la ex-Yugoslavia, el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales y la Corte Penal Internacional, la jurisdicción internacional seguía siendo un instrumento esencial para luchar contra la impunidad. De conformidad con los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977 y 2005, incumbe a los Estados la responsabilidad de llevar a los autores ante la justicia. En los casos en que los Estados no puedan o no quieran enjuiciar a sus ciudadanos o juzgar los crímenes cometidos en su territorio, la jurisdicción universal desempeñaría la función de impedir la impunidad llenando la laguna que puede surgir al no incoarse un procedimiento penal en el ámbito nacional ni en el internacional.

39. Si bien puede haber consideraciones de política nacional en la aplicación de la jurisdicción universal, se deben respetar en todo momento la independencia del poder judicial y las garantías de un juicio imparcial.

IV. Carácter de la cuestión que se examina: comentarios concretos de los Estados

Colombia

40. Colombia considera que la jurisdicción universal es de carácter residual y se ejerce en relación con delitos presuntamente cometidos en el territorio de otro

Estado por nacionales de otro Estado, en detrimento de nacionales de otro Estado y sin obrar una amenaza directa para los intereses vitales del Estado que ejerce la jurisdicción. Además, señala que la jurisdicción universal legislativa se da con mayor frecuencia que la jurisdicción universal contenciosa, pero ambas pueden ser aplicables.

41. Colombia destaca que la jurisdicción universal debe diferenciarse de la jurisdicción de los tribunales internacionales, concretamente de la de la Corte Penal Internacional, y del principio *aut dedere aut judicare*, que conforman estrategias complementarias para luchar contra la impunidad. Las principales cuestiones que se tienen que debatir son las relativas a las jurisdicciones concurrentes, la importancia del *ius cogens*, si es opcional u obligatoria la aplicación de la jurisdicción universal y su relación con las amnistías y los indultos.

Cuba

42. Cuba⁴ reiteró su opinión de que la aplicación de la jurisdicción universal debía regularse a nivel internacional para impedir su uso indebido de forma unilateral, selectiva y motivada políticamente. Además, Cuba apoya la elaboración de normas o directrices internacionales que establezcan claramente en qué condiciones, o dentro de qué límites, se puede invocar el principio de la jurisdicción universal, así como los delitos a los cuales se les aplicaría el principio, si hubiese un consenso internacional para ello. En la aplicación de la jurisdicción universal deben respetarse los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, especialmente los principios de igualdad soberana, independencia política y no injerencia en los asuntos internos de los Estados, y se debería señalar su carácter excepcional y supletorio.

43. Cuba destacó que la jurisdicción universal solo debía aplicarse en circunstancias excepcionales, cuando no exista otro recurso para enjuiciar a los responsables, y debía limitarse por el respeto absoluto de la soberanía y ser siempre supletoria de la acción y jurisdicción nacional de los Estados. Asimismo, Cuba señaló que antes de aplicar la jurisdicción universal se debía contar con la aprobación del Estado donde se había cometido el delito o de aquellos países de los cuales el acusado fuera nacional.

44. Cuba indicó también que la aplicación de la jurisdicción universal no debía infringir la inmunidad de los Jefes de Estado y de Gobierno, el personal diplomático y otros funcionarios de alto rango en ejercicio, concedida en virtud del derecho internacional.

45. Cuba sugirió que la jurisdicción universal se restringiera a los crímenes de lesa humanidad.

Líbano

46. El Líbano reiteró sus anteriores observaciones (véase A/66/93, párrs. 146 a 148).

Panamá

47. Panamá reiteró la información que figuraba en los párrafos 38 y 39 del informe anterior (A/67/116).

⁴ Para los comentarios presentados previamente por Cuba, véanse A/65/181 y A/67/116.

Cuadro 1
Legislación específica pertinente al tema, sobre la base de la información
presentada por los gobiernos

<i>Categoría</i>	<i>Legislación</i>	<i>País</i>
Tráfico o trata de esclavos	Sección 270 del Código Penal	Australia
	Ley por la que se Modifica la Legislación sobre Delitos (Esclavitud y Situaciones Similares y Trata de Personas) de 2013	Australia
Genocidio	Ley núm. 45 de 7 de febrero de 2013 (por la que se modifica el artículo 135 del Código Penal)	Moldova
	Código Penal de Suecia, capítulo 2, artículo 3.7	Suecia
Mercenarios	Ley núm. 45 de 7 de febrero de 2013 (por la que se modifica el artículo 130 del Código Penal)	Moldova
Crímenes de lesa humanidad	Ley núm. 45 de 7 de febrero de 2013 (por la que se modifica el artículo 135 1) del Código Penal)	Moldova
	Artículo 4 de la Ley IV de 1978 por la que se aprueba el vigente Código Penal; artículo 3 de la Ley C de 2012 por la que se aprueba el nuevo Código Penal	Hungría
Crímenes de guerra	Código Penal, artículo 11; Ley núm. 45 de 7 de febrero de 2013 (por la que se modifican los artículos 127 y 137 del Código Penal)	Moldova
	Artículo 3 de la Ley C de 2012 por la que se aprueba el Código Penal	Hungría
Crímenes contra el derecho internacional	Código Penal de Suecia, capítulo 2, artículo 3.6, y capítulo 22, artículo 6 (en que se define el delito contra el derecho internacional como “la violación grave de un tratado o acuerdo con una potencia extranjera o el quebrantamiento de un principio o postulado generalmente reconocido relacionado con el derecho internacional humanitario en el marco de los conflictos armados”)	Suecia
Delitos contra el Estado	Código Penal, artículo 11	Moldova
	Código Penal (Ley 599 de 2000), artículo 16 (delitos contra la existencia y la seguridad del Estado; delitos contra la Constitución y el ordenamiento jurídico; delitos contra el orden económico y social, con excepción del blanqueo de dinero; delitos contra la administración pública)	Colombia

<i>Categoría</i>	<i>Legislación</i>	<i>País</i>
Delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad	Código Penal, artículo 11	Moldova
Delitos contra la moralidad y de explotación	Ley núm. 23 de 7 de julio de 2004 (por la que se aprueba el artículo 3 a) del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional)	Panamá
Blanqueo de dinero/bienes	Código Penal, artículo 389, modificado por el artículo 11 de la Ley núm. 1 de 5 de enero de 2004	Panamá
Falsificación	Código Penal (Ley 599 de 2000), artículo 16	Colombia
Financiación del terrorismo	Código Penal (Ley 599 de 2000), artículo 16	Colombia
Administración de recursos vinculados a actividades terroristas	Código Penal (Ley 599 de 2000), artículo 16	Colombia
Tráfico de estupefacientes/drogas	Ley 13 de 27 de julio de 1994	Panamá

Cuadro 2

Tratados pertinentes mencionados por los Gobiernos, incluidos los tratados que contienen disposiciones sobre el principio *aut dedere aut judicare*

A. Instrumentos universales

Genocidio	Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948	Colombia, Moldova, España
Derecho internacional humanitario	Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales	Panamá, Moldova, España
Derecho penal internacional	Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 1998	Colombia, Moldova, España, Suecia
Estupefacientes y sustancias psicotrópicas	Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, de 1988	Moldova
Corrupción y delincuencia organizada transnacional	Convenio Relativo al Blanqueo, Seguimiento, Embargo y Decomiso de los Productos del Delito, de 1990	Moldova

	Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de 2000	Colombia
	Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de 2003	Colombia
Tortura	Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1984	Colombia, España, Suecia
Trata de personas	Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de 2000	Colombia, Panamá
Delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos	Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, Inclusive los Agentes Diplomáticos, de 1973	España
Desaparición forzada	Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 2006	Colombia, Panamá
Delitos relacionados con el terrorismo	Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo, de 1977	Moldova
Protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado	Segundo Protocolo de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado, de 1999	Panamá
Imprescriptibilidad	Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, de 1968	Colombia
Carácter general	Carta de las Naciones Unidas, de 1945	Cuba

B. Instrumentos regionales

Derechos humanos	Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 1950	España
------------------	--	--------